

# EN DEFENSA DE LA **ESCUELA PÚBLICA**



**Enrique J. Díez Gutiérrez**

**Nº 338**

cuadernos  
Caum

**ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZ** es Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida.

Imprime y edita CAUM

Diciembre 2019

C/ Atocha, 20- 1º izqda.

Madrid 28012

Tfno. 91-3691652

[www.caum.es](http://www.caum.es) // Correo: [caummadrid@gmail.com](mailto:caummadrid@gmail.com)

También en Facebook y Twitter

A stylized, handwritten-style logo for CAUM in red ink. The letters are thick and fluid, with the 'C' and 'A' being particularly large and connected to the rest of the word.

# PRESENTACIÓN

El derecho universal a la educación representa uno de los hitos más importantes de la conquista de los derechos humanos y es el más claro exponente del grado de desarrollo democrático de una sociedad. Y justamente por ser un factor de emancipación, de libertad y de igualdad entre las personas, siempre ha sido objeto de control ideológico, político y económico por parte del poder.

En España en este momento, cuando se abre la posibilidad de tener un gobierno de progreso, y a pesar de los moderadísimos planteamientos del programa político en lo que se refiere a la enseñanza, saltan de nuevo a la palestra los viejos argumentos reaccionarios y elitistas, por parte de la Iglesia Católica y las fuerzas conservadoras, que no son otra cosa que falacias y mentiras para defender y mantener sus privilegios seculares.

Los artículos que hemos seleccionado para este cuaderno son obra de **Enrique J. Díez Gutiérrez**, profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de León, autor de numerosos libros y artículos, reconocido por su conocimiento y capacidad de análisis de los problemas de la educación en



nuestro país. Él, como tantos otros profesores/as, padres, madres, alumnos/as, defensores de la escuela pública, hemos visto a lo largo de los últimos años cómo los gobiernos de la derecha (y no sólo la derecha) están abandonando y recortando los recursos del sector público en favor del sector privado.

En estos artículos se aclaran conceptos y se desmontan mitos y prejuicios sobre la enseñanza pública y la concertada.

Esperamos que el contenido de este cuaderno nos sirva de impulso para la defensa de la escuela pública, laica, inclusiva y de calidad que necesita nuestra sociedad.



## **Financiar públicamente las opciones educativas privadas no está en la Constitución**

La alianza *neocon* (neoliberales y conservadores), abanderada en este caso por los obispos, la jerarquía católica y la patronal de la concertada, han puesto el grito en el cielo (metáfora adecuada en este caso), al oír a la ministra de educación Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, asegurar que la “libre elección” de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución. A pesar de la reiterada defensa y apoyo de los conciertos educativos de Celaá, algo que ha demostrado no solo en su práctica ministerial durante el gobierno del PSOE, sino como consejera de educación en el país vasco, ha reconocido que, efectivamente, la libertad de las familias para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos e hijas «no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución».

La derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquía católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todas y todos) se ha alzado en armas, para anunciar que el nuevo gobierno “bolivariano” PSOE-Unidas Podemos “cercena el derecho de las familias”, “adopta posturas radicales”, “se aleja del pacto constitucional”, “engrasa la maquinaria de adoctrinamiento”, “declara la guerra”, etc., etc. Todas expresiones de dirigentes políticos y mediáticos de la alianza neocon.





Sorprende esta reacción en pleno siglo XXI porque es algo bien sabido que la Constitución, el Derecho Constitucional y el propio Tribunal Constitucional da toda la razón, en esta ocasión, a la ministra de educación, cuando se reafirmaba delante

de 2.000 directores y dueños de centros educativos católicos, tras el murmullo de protesta que se extendía por el Congreso antes sus palabras, declarando que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza», recogida en la Constitución, aludiendo a la sentencia del propio Tribunal Constitucional al respecto.

Ha recordado también que el modelo de conciertos de España es una anomalía en el panorama europeo. De hecho, somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta. En todos los demás países, según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Inmediatamente, el presidente del PP, Pablo Casado, al servicio de la patronal de la concertada y de la jerarquía católica, ha tuiteado (al estilo Trump: política a través de twitter) que la libertad de enseñanza es «fundamental» en democracia y «está garantizada por la Constitución». Claro, eso es, efectivamente lo que dice la Constitución: “libertad de enseñanza”, que se sustancia en “libertad de creación de centros docentes”, no de financiación pública de las elecciones privadas. Del artículo 27 no se puede interpretar que el Estado tenga la obligación de

contribuir a financiar y mantenerlas. Pero parece que, a pesar de su cansina reiteración de autodeclararse constitucionalistas, pocos leen la Constitución.

De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La “libertad de enseñanza” reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.

Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, fue voluntad política del gobierno del PSOE de Felipe González establecer y consagrar, en la ley



educativa LODE, que se pudiera elegir entre dos redes, y que ambas fueran financiadas con fondos públicos, tanto la pública como la privada. Con lo que se quiere confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno está ni en nuestra Constitución ni en el derecho comparado.





El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: *"...siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales."* Por lo que, como dice Celaá, en ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro.

No obstante, poco sorprende que el PP y Casado utilicen esto como arma arrojada contra el acuerdo de nuevo gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos en España. Así lo manifiesta en el final de su tuit Casado denunciando «el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología». Haciendo gala justamente de su política y filosofía habitual, que tilda de adoctrinamiento todo lo que no sea el suyo.



Revuelta neocon a la que se ha sumado el partido neoliberal radical Ciudadanos, a través de su portavoz Arrimadas, que también tuitea en la misma clave: “entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. Pero, quizás, quien expone con más claridad los principios esenciales de esta revuelta neocon es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, asegurando que (y fíjense en los términos que emplea) “la exclusión del derecho de los padres” supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas “conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”, y que «las administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado”. Las dos claves esenciales: “libertad de elección” y “demanda social”. La base del modelo neoliberal, anclada en la pedagogía del individualismo insolidario, aplicado a la educación. Filosofía que proclaman con entusiasmo ahora tanto neoliberales como neoconservadores modernizados.

Lógicamente, a esta reacción neocon se han unido los medios de comunicación afines. El periódico *El Mundo* titulaba: “Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio”. Iniciando la crónica con *“En un guiño a Podemos... ha lanzado este jueves toda una declaración de guerra a la escuela concertada, donde estudia casi una cuarta parte del alumnado español”*. Ahí es nada. Parecen frases sacadas del manual de cómo articular un *lawfare* o guerra política de baja intensidad, que están aplicando como alternativa a los golpes de estado armados clásicos en tantos países del continente latinoamericano. A este discurso incendiario se apuntan, cómo no, otros voceros neocon con titulares similares: *“Contra la enseñanza en libertad”*, o la radio de los obispos, la COPE: *“oscuros presagios para la libertad educativa en esta legislatura”*.

Lo que tenemos que ser conscientes es que esta reacción neocon, ante siquiera la posibilidad de cuestionamiento teórico, que no práctico (recordemos que la ministra es una fiel defensora de la educación concertada en toda su trayectoria política hasta ahora), de una de las bases fundamentales de afianzamiento y extensión de su ideología, responde a un rearme ideológico, propiciado por el auge de la extrema derecha con quien han pactado y están gobernando en diferentes partes del país. Recordarles, como ha hecho recientemente Unidas Podemos, que la Constitución, redactada y pactada también incluso por dirigentes de la dictadura, establece que tiene que haber impuestos progresivos, redistribución de la riqueza o mínimos derechos humanos elementales, les parece infundios bolcheviques, propios de su eterna reencarnación del mal: el comunismo.

Debemos saber pues, que la alianza de los herederos del franquismo y los neoliberales junto con los ultraderechistas, no está dispuesta a renunciar a ninguno de los privilegios que se ha arrogado, y que mantienen a través no solo del poder económico, mediático, judicial y político, sino sobre todo ideológico. Consideran la educación y el sistema educativo uno de los medios fundamentales de producción ideológica y perpetuación de su control. Cuestionar sus privilegios en educación es, para ellos, declararles la guerra. Y ya sabemos cómo las gastan en estos casos. (Noviembre/ 2019)

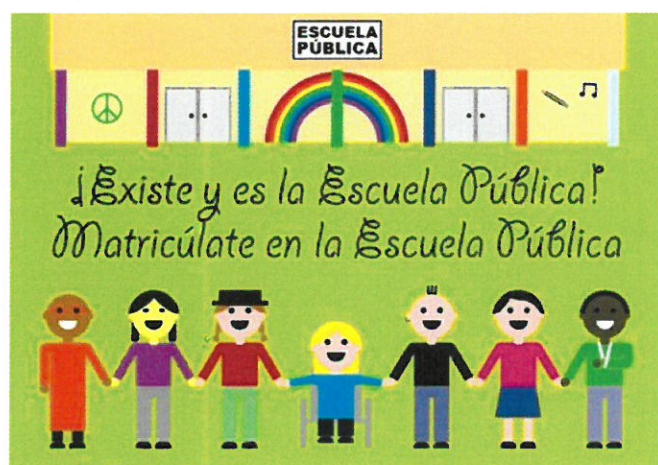
Para saber más: [DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. \(2019\). 'La revuelta educativa neocon'. Oviedo: TREA.](#)





## **Pacto educativo por una escuela pública, laica e inclusiva**

Un cambio de rumbo radical en tres aspectos clave: supresión de conciertos educativos, laicidad en la escuela y blindaje de la financiación de la educación pública por encima del 6% del PIB. A esto se pueden añadir muchos aspectos de mejora pedagógica, metodologías más innovadoras, estabilización de las plantillas del profesorado, formación inicial y permanente mejor y más práctica, medidas efectivas de inclusión educativa y social, de coeducación y feminismo en las aulas y los centros, de ecología y educación para el decrecimiento, potenciar una FP más diversa y dotada, desarrollar el valor de la escuela rural y de la educación de personas adultas, y muchas más propuestas e iniciativas que tenemos en mente y puedan ayudar a construir y asentar una educación más justa, solidaria y mejor en el siglo XXI.



Pero sin las tres primeras, de nada o prácticamente de muy poco servirán. Porque estos tres elementos son la “clave de bóveda” de un sistema público, laico e inclusivo. De poco valen las medidas para remozar o renovar un sistema, si venden, privatizan,

deterioran y destruyen el sistema. Porque es a través de estos tres “agujeros negros” por donde se desangra a raudales el actual sistema educativo público. Agujeros negros que se evita abordar de una forma decidida y clara en las propuestas electorales y en las reformas



educativas, heredando modelos obsoletos sin cuestionarlos. Agujeros negros que marcan el eje fundamental de una disyuntiva básica: una educación pensada al servicio de todos y para el bien común o centrada en la selección, la segregación y el negocio para una élite.

Porque la educación o es pública, o es segregación por clase social, sexo o ideología. La educación o es laica, o es adoctrinamiento religioso en creencias particulares. La educación o está financiada, o se produce un progresivo deterioro e imposibilidad de una inclusión real con recursos. Es una ecuación bien fácil de entender y de constatar.

Por eso, en una educación pensada para el bien común es necesario y urgente parar y revertir la segregación que supone el sistema de conciertos educativos, una “anomalía española” en el panorama europeo, que sangra las arcas públicas para financiar empresas y opciones privadas. Este modelo de conciertos alienta y naturaliza la selección y la competencia entre la comunidad educativa. Ya no se trata de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sean propios o ajenos. Ya no se trata de que la comunidad educativa luche conjuntamente para que todos los niños y niñas tengan el mejor colegio público al lado de su casa. Lo que se pretende es normalizar un sistema de consumo competitivo y de mercado, donde cada familia se vea como un “avisado inversor” que ha de seleccionar la mejor “inversión educativa” para el futuro de sus hijos e hijas frente a los demás. Ya no se trata de involucrarse en la asociación de madres y padres del colegio al lado de tu casa, para mejorarlo, pensando en el bien común de todos los niños y niñas del centro, sino en ser un “consumidor inteligente” y adelantarte, buscando la oportunidad, para conseguir colocar a tu hijo o hija, aunque sea al otro lado de la ciudad –si tienes recursos y medios para desplazarte diariamente-, en aquel centro privado en el que te han asegurado que estará con los que son de su clase social o, al menos, que no se mezclará con los que no lo son.

Recordemos que los centros privados-concertados solo escolarizan a menos del 20% de la población migrante, de minorías o con necesidades educativas.



El otro gran agujero negro de la educación es la imposición de la religión en los centros escolares y en las facultades de Educación de todo el Estado, herencia nacionalcatólica aún de la dictadura fascista. Esta segunda anomalía histórica, que todavía sujeta con

mano de hierro la influencia inexplicable de la jerarquía católica en España, impide respetar la libertad de conciencia de los niños y las niñas, educar sin dogmas y eliminar toda forma de adoctrinamiento en el currículo escolar y en la escuela. Además, impide igualmente garantizar una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones en función de sus particulares convicciones ideológicas, posibilitando la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones.

El tercer agujero negro es la financiación de la educación pública. Elemento clave para sentar las bases y los medios para dotar de recursos una educación inclusiva que atienda realmente la diversidad en las aulas y los centros, que permita reducir el número de alumnado por aula en función de las recomendaciones de la UNESCO, que elimine la precariedad del profesorado interino y establezca plantillas docentes para desarrollar proyectos educativos que necesitan tiempo y persistencia, que impida que 50.000 escolares empiecen el curso en barracones, que

se pueda implementar una formación inicial y permanente más práctica, que se potencie una Formación Profesional con recursos y medios, etc., etc.

Si proclamamos que la educación es el futuro de un país, si mantenemos que una sociedad educada es base de la democracia y el desarrollo social y comunitario de la humanidad, si aseguramos incluso que el desarrollo tecnológico y productivo sostenible y respetuoso con el entorno se asegura con más y mejor educación, invirtamos en ella. No hay excusa. No puede haber dilación. En vez de rescatar a bancos, y destinar 60.000 millones de nuestros impuestos a los responsables en buena parte de la crisis, o rescatar autopistas de las grandes empresas y los empresarios de siempre o el Castor..., o tantas barbaridades, destinemos el dinero público a la educación pública. Ha sido voluntad política rescatar a los bancos. Se sacó dinero para ello. Que no nos digan que no se puede blindar la financiación de la educación pública para que, como mínimo, se invierta el 6% del Producto Interior Bruto que producimos anualmente. Y que se blinde constitucionalmente para que ningún gobierno lo pueda modificar. Es cuestión de voluntad política, porque dinero, como se dice tradicionalmente, “haberlo haylo” (si lo hay para rescates o para armamento, no va a haberlo para educación).

Dejemos por tanto de marear la perdiz. Es hora de abordar el futuro educativo en España. Y afrontar de forma clara y decidida el modelo de educación que queremos: pública, laica e inclusiva al servicio del bien común y considerada como un derecho para todos y todas; o concertada y privada, confesional y segregadora al servicio del interés privado y el negocio educativo, al servicio de la selección.

Tras el trabajo de varios años, amplios sectores del mundo de la educación (asociaciones, colectivos y movimientos de renovación pedagógica, sindicatos, organizaciones estudiantiles, confederaciones de asociaciones de familias y partidos políticos), han conseguido consensuar



un Acuerdo Social y Político, surgido de la propia comunidad educativa, plasmando en el Documento de bases para una nueva Ley de Educación una alternativa que sirva de base para un Pacto por una Educación Pública, Laica e Inclusiva que dé estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones. Nunca antes se había logrado un consenso tan amplio en torno al modelo educativo que necesitamos para el siglo XXI.

Solo es necesaria voluntad política para que se lleve a la práctica en torno a la educación como un bien común, un derecho básico universal que solo se puede garantizar para todos y todas en y por la educación pública, laica e inclusiva. (Octubre 2019)



## ¿Conciertos educativos o enseñanza pública?



España constituye una anomalía dentro del panorama europeo por la cantidad de centros privados que reciben financiación pública a través de subvenciones. Nos hemos convertido en el cuarto país de Europa con este tipo de centros, desde que en 1985, con la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), el gobierno del PSOE dio carta de naturaleza legal y consolidó como una categoría propia

estos «conciertos educativos». Según datos del Consejo Escolar del Estado, la escuela concertada recibe más de 6.300 millones de euros anuales.

En todos los demás países, según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2 % en Educación Primaria y un 83 % en Secundaria en la UE-28, frente a un 67,3 % de España). Si la media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,7 % en España, en algunas de las comunidades en las que han gobernado partidos conservadores el porcentaje supera el 50 % (Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco).

De hecho, prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Además, el 63 % de este sector privado (que

representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.

### **La «libertad de elección» esconde la «preferencia de selección» escolar**

Esta tendencia se trata de justificar en función de la «demanda» de centros concertados por parte de determinadas familias, aun cuando los centros públicos presentan condiciones objetivas más favorables para una mejor educación (con aulas menos masificadas, con profesorado seleccionado en oposiciones exigentes y objetivas, etc.).

«La primera hipotética razón nos haría pensar que los centros concertados pueden ofrecer una mayor calidad en la educación académica, pero los datos no dicen eso, una vez que se descuenta el efecto de las características socioeconómicas del alumnado. En segundo lugar, tampoco los resultados respaldan una hipotética mejor formación en comportamientos sociales en los centros concertados con respecto a los centros públicos. En tercer lugar, el factor religioso (católico) tiene una cierta relevancia, aunque no parece determinante en último extremo para la elección de centro» (Fernández y Muñiz, 2012, 115; Rogero y Andrés, 2014).

«Lo que sí respalda la evidencia estadística es la creencia de los padres y las madres en que los 'contactos' sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas, motivo por el cual suelen preferir centros concertados» (Fernández y Muñiz, 2012, 115; Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014), pues parecen considerar que «las características socioeconómicas medias del alumnado y de sus familias» les pueden proporcionar más ventajas competitivas en el futuro social y laboral. Lo cierto es que las investigaciones demuestran reiteradamente que, como dice Gimeno Sacristán (1998), detrás de muchas invocaciones



a la «libertad» de elección de centro, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.

La reciente investigación en sociología de la educación, de la Universidad Autónoma de Madrid (Rogerio y Andrés, 2016), confirma que «la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas». Asimismo, el informe de la OCDE «Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja», indica que «proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos».



### La Constitución no ampara los conciertos

El doble principio constitucional del derecho a la educación y la libertad de enseñanza no se refiere en ningún momento a la preferencia de selección de centro educativo. Hace referencia a la capacidad de creación de centros o a la libertad de cátedra. Pero en modo alguno se establece en nuestra Constitución ni en el derecho comparado que el

Estado esté obligado a financiar públicamente la gratuidad de la enseñanza básica obligatoria en los centros privados que se creen, por el

simple hecho de que las familias quieran llevar a sus hijos o hijas a un centro distinto del creado por los poderes públicos.

Así lo ha dejado asentado incluso el propio Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: «...siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales».

### **La doble red segrega**

La doble red de centros se ha convertido en estos años en garantía de desigualdad. El 82 % del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública (Sáenz, Milán y Martínez, 2010). Por eso, los expertos afirman que «no cabe hablar de calidad de la enseñanza, sino de calidad social de la clientela» (Feito, 2002, 121). Los conciertos alientan un círculo vicioso de segregación social que aboca a una importante merma de la equidad y la cohesión social. Exclusión que se ve amplificada con la separación por sexos y la segregación por clases sociales.

### **No hay razón para justificarlo**

En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de «conciertos educativos» se justificaron como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, en el momento actual, ya no se pueden justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por otro tipo de razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012) de una determinada corriente neoliberal muy extendida ligada a esa «libertad de elección» (preferencia de selección).

Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones privadas. Además, teniendo en cuenta que la educación concertada supone un sobrecoste no solo para el erario público sino también para las familias. Si inicialmente la inversión pública

EL ROTO



por alumno y alumna en la concertada es muy similar a la pública, el problema es que a esta inversión inicial hay que añadir un gasto en la concertada de más de 1.500 euros, mientras que en la pública es de 822 euros. Además del IBI que tenemos que pagar a los ayuntamientos por los centros privados concertados, pues están exentos.

### Garantizar la cohesión social y el bien común

Nos tenemos que preguntar en qué y en quién se nos está obligando a pensar cuando nos incitan a «elegir» un centro educativo. ¿La mejor educación posible solo debemos buscarla para mi hijo o hija, o todos los niños y niñas deben tener derecho a la mejor educación, sean hijos e hijas de quienes sean?

Siendo razonable que todas las familias puedan acceder al centro educativo que deseen, no se puede equiparar la preferencia de elección de colegio con un derecho fundamental. Las preferencias particulares se las tiene que pagar cada uno. El Estado debe velar por el bien común.

El derecho a la mejor educación para todos y todas es lo que debe garantizar una comunidad, y esto es solo posible destinando los recursos públicos a planificar una red pública que garantice el derecho a la mejor educación posible de todos los niños y niñas sin exclusión.

Se trata, en definitiva, de conseguir que todos los niños y niñas tengan una escuela pública al lado de su domicilio, que esté dotada de los mejores recursos y profesionales, ya que no solo es menos costoso y más equitativo, sino que preserva los fines sociales de la educación. (Marzo-- 2019)





## **El mito del ahorro de la escuela privada-concertada**

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ha distribuido recientemente, con la prensa diaria, un folleto donde afirma que sus 2.458 centros privados-concertados suponen un ahorro para el erario público de 3.601 millones de euros. Aseguran también que atienden a un total de 1.434.524 estudiantes (casi todos en centros concertados), por lo que vienen a decir que nos ahorran al menos 2.510 euros por alumno y curso. Esta afirmación no parece basarse en ningún estudio científico, sino en su profunda fe en que lo privado es más rentable que lo público, o en su creencia en los “milagros”. Pues no podría calificarse más que de milagro la continua tergiversación de datos a los que nos tiene acostumbrados el clero, en este y otros tantos temas, cuando hace publicidad (engañosa) de sus cuentas.

Sin embargo, la investigación realizada por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida, titulada **El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada, desmiente rotundamente ese mito interesado acerca de que la educación privada-concertada sea más barata que la pública.** Demostrando en ella que este tipo de informaciones y titulares sobre el pretendido “ahorro público” que supone la enseñanza privada-concertada, no son más que una burda manipulación.

Exclusivamente desde el punto de vista económico, **a igualdad de condiciones, ambos modelos cuestan lo mismo** (4.185 euros por alumno en la pública, frente a 4.184 en la privada-concertada). Pero, además, si a esto añadimos lo que supone el gasto de las familias, **el coste anual por estudiante en la enseñanza privada-concertada se situaría en 5.733 euros, mientras que en la educación pública sería de 5.007 euros.** El INE constata en efecto que las familias de la escuela pública tuvieron un gasto de 822 euros por alumno/a, mientras que para quienes acudieron a

un centro privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por escolar.



Cuando el diario La Razón en 2011 afirmaba “estudiar en la pública cuesta el doble que en la concertada”, daba datos trucados, imputando a la enseñanza concertada exclusivamente lo que efectivamente le concierne (gastos de personal y de

funcionamiento), mientras que en la educación pública incluyen todo tipo de gastos, aunque no tengan correlato alguno en la enseñanza concertada, además de ocultar el coste añadido para las familias que supone la enseñanza privada-concertada.

No se pueden hacer afirmaciones de este tipo si no se hace un estudio comparado de los distintos capítulos presupuestarios que afectan tanto a la enseñanza pública como a la privada concertada, que serían los gastos de personal y de bienes corrientes y servicios. Hasta el capítulo de “Transferencias corrientes” se suele añadir a los gastos de la pública, a pesar de que corresponde precisamente a la financiación de los conciertos educativos.

Hay en efecto toda una serie de **ámbitos educativos que la enseñanza privada-concertada no atiende** y que los presupuestos de la educación pública tiene que asumir: Educación a distancia, Educación en el exterior, Enseñanzas de Régimen especial o Educación compensatoria. Tampoco se pueden imputar sólo a la educación pública las partidas que atienden indistintamente a ambas redes de centros, como Formación y perfeccionamiento del profesorado o Investigación educativa, entre

otras, como se hace sistemáticamente en los artículos divulgados al respecto.

El estudio realizado utiliza datos del MECD, el INE y el Consejo Escolar del Estado para calcular la inversión en aquellos capítulos y partidas que tienen su correlato en la privada-concertada; e introduce otros factores de corrección, dadas las diferencias entre ambas redes educativas en condiciones que resultan decisivas para comparar el coste por alumno, como son la ratio profesorado/grupo, la ratio alumnado/grupo y el salario del profesorado.

Lo que se ha constatado en esta investigación es que **si la privada-concertada tiene menor coste es porque ofrece peores servicios** (desatiende las zonas rurales y selecciona a su alumnado -el 82% de alumnado inmigrante y de minorías está escolarizado en centros públicos-) **e inferiores condiciones laborales a sus profesionales, que tienen mayor número de escolares a su cargo e inferiores sueldos.**

### **Veamos por qué**

Las diferentes ratios de alumnos/ as por aula y de docentes por grupo que hay en ambas redes, influyen poderosamente en el coste medio por plaza escolar. Estas diferencias obedecen a que la educación pública tiene que asegurar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, por lo que tiene que llegar a todas las zonas geográficas y acoger a todo tipo de alumnado, **lo que no sucede en el caso de la enseñanza privada concertada que muestra un total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables**, como son las zonas rurales o los municipios de menor población (hasta 10.000 habitantes, el 90% de los centros son públicos), donde el coste medio por alumno es bastante mayor, según viene constatando el Consejo Escolar del Estado en sus informes anuales. Las estadísticas oficiales demuestran que la ratio de alumnado por grupo se reduce a medida que baja el tamaño de los



municipios y la ratio de profesorado por grupo es superior a la media. Ambas circunstancias encarecen el servicio, pero su rentabilidad social es enorme e irrenunciable: permite ejercer su derecho a la educación a más de un millón de escolares en condiciones de igualdad.

## POR LA ESCUELA PÚBLICA



Respecto al alumnado que la privada concertada (des)atiende, hay que señalar, por ejemplo, que son más del doble **el número de programas de diversificación curricular en la educación pública** con un reducido número de escolares por grupo (máximo 15). Igualmente hay que considerar que

**la mayor parte del alumnado con necesidades educativas específicas está en centros públicos.** La escolarización de este alumnado no sólo implica una reducción de la ratio escolar en los grupos correspondientes, sino que además requiere añadir profesionales especialistas. Lo cual también es aplicable, en cierta medida, al porcentaje de alumnado inmigrante que requiere recursos y apoyos complementarios para el éxito de su escolarización.

Vale la pena destacar que los dos factores clave que contribuyen al coste de una plaza (número de docentes por grupo y de alumnos/as en cada aula) afectan directamente a la **calidad educativa**. En este sentido, las diferencias son palpables, ya que en 2011 los centros públicos tuvieron una media de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por cada clase, mientras que en los concertados los grupos tuvieron una media de 23 estudiantes y fueron atendidos por 1,68 profesores. **En efecto, si se eleva el número de escolares a cargo de cada docente, se reduce el tiempo y la atención que puede dedicar a cada alumno/a, lo que redundará en una respuesta educativa menos personalizada.**

Por último, **las condiciones salariales del profesorado** –que suponen más del 60% del gasto educativo–, también repercuten significativamente en el coste de la plaza escolar, ya que mientras los docentes de la pública cobran un salario medio de 36.784 euros, los de la privada- concertada tuvieron un sueldo de 30.976 euros.



Por lo tanto, a partir de datos oficiales y no de creencias, con una metodología acorde con la que se utiliza en los estudios comparativos internacionales, el supuesto “ahorro” por plaza escolar de la enseñanza concertada está relacionado con un mayor número de escolares por aula y con menos docentes por grupo, como consecuencia de su escasa implicación a la hora de acoger al

alumnado que requiere mayor atención educativa y de su total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor población.

No es de extrañar, por tanto, que **los recortes educativos de los últimos cursos se hayan dirigido a alterar ambas ratios, rebajando así la calidad y equidad de la educación pública**: el recorte de docentes en los dos últimos años ha sido de 60.000 profesores, además de congelar o reducir sus salarios. Estudios recientes revelan al respecto que en los últimos años (2007- 2012) el gasto medio por estudiante en la enseñanza pública se ha reducido en 648€, mientras que el de la privada concertada ha aumentado 105€. Y la situación, alerta el estudio, no tiene visos de igualarse por arriba, sino por abajo.

Si esta investigación hubiese podido utilizar los datos oficiales del año 2012 o 2013, todavía no disponibles, muy probablemente la diferencia entre el coste por alumno/a en la educación pública y en la concertada habría sido mucho menor, puesto que en los últimos años se están acomodando los estándares de la enseñanza pública a los de la privada concertada, a pesar de que ello conlleve una merma en la calidad y equidad de la educación.

Además no podemos obviar que si a esto le añadimos el desembolso económico que tienen que hacer las familias en la pública y en la privada-concertada, anteriormente comentado, **la plaza escolar de la privada concertada es mucho más cara que la pública.**

Por tanto, la educación pública no sólo es más rentable, sino que llega a todos los lugares y atiende a todo tipo de alumnado; además de ofrecer todas las modalidades educativas y mejores condiciones laborales a sus profesionales, lo cual redundará en mejor calidad y equidad. En definitiva, la escuela pública no sólo es la que puede compensar las desigualdades sociales y propiciar mayor cohesión social, sino que cumple ese irreemplazable papel sin que ello suponga mayor coste real para el erario público o para las familias. (Junio/2014)

NOTA - Además de **Enrique Díez**, artículo firmado por **M<sup>a</sup> Jesús Martín** (*Catedrática de Enseñanza Secundaria*), **Loles Dolz** (*Catedrática de Enseñanza Secundaria*), **Carmen Rodríguez** (*Profesora Titular de la Universidad de Málaga*) y **Luis Castrillo** (*Funcionario TIC*). Son componentes del Área Federal de Educación de Izquierda Unida y miembros del Observatorio por la Educación Pública.



## ÍNDICE

Presentación.....	Pág. 3
Financiar públicamente las opciones educativas privadas no está en la Constitución. ....	Pág. 4
Pacto educativo por una escuela pública, laica e inclusiva.....	Pág. 10
¿Conciertos educativos o enseñanza pública? .....	Pág. 15
El mito del ahorro de la escuela privada-concertada.....	Pág. 21



**58 AÑOS DIFUNDIENDO  
PENSAMIENTO CRÍTICO**

*Causa*